



Acción de Tutela No. 5252-040-89001-2023-00014-00

CONSTANCIA SECRETARIAL. - Francisco Pizarro (N), junio 27 de 2023.- En la fecha doy cuenta al señor Juez, de la presente acción de tutela interpuesta por el señor JAIME ENRIQUE CASTILLO BANGUERA en contra de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO (N), por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales de TRABAJO, IGUALDAD, ACCESO A CARGOS PUBLICOS, , NO DISCRIMINACION Y CONFIANZA LEGITIMA, misma que fuere remitida a este despacho, por factor competencia territorial de conformidad con providencia de la misma calenda emitida por el JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE TUMACO. Sírvasse proveer.


ROSA FUERTES CEBALLOS
SECRETARIA

**JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL
FRANCISCO PIZARRO (NARIÑO)**

Salahonda-Francisco Pizarro (Nariño), veintiocho (28) de junio de dos mil veintitrés (2023)

Referencia:	Acción de Tutela
Radicación N°:	5252-040-89001-2023-00014-00
Accionante:	Jaime Enrique Castillo Banguera
Accionados:	Registraduría Nacional del Estado Civil, Delegación Departamental de Nariño de Registraduría Nacional del Estado Civil y Registraduría Municipal de Francisco Pizarro (N)
Derechos vulnerados:	Derecho al Trabajo, Igualdad, Acceso A Cargos Públicos, no Discriminación y Confianza Legitima

Visto a integridad el informe secretarial que antecede, procede el Despacho a resolver lo conducente, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

Vía correo electrónico institucional del Despacho, se remite por parte del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE TUMACO (N), acción de tutela interpuesta por el señor JAIME ENRIQUE CASTILLO BANGUERA en contra REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, DELEGACION DEPARTMAENTAL DE NARIÑO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y REGISTRADURIA MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO (N), por la presunta vulneración a sus derechos fundamentales al TRABAJO, IGUALDAD, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, NO



DISCRIMINACIÓN Y CONFIANZA LEGITIMA, en cumplimiento a decisión adoptada mediante providencia de fecha 27 de junio de 2023, bajo el siguiente argumento:

“El Decreto 2591 de 1991 reglamentado por el artículo 1º del Decreto 1382 de 2000, dispuso que “son competentes para conocer de la acción de tutela, a prevención, los jueces o tribunales con jurisdicción en el lugar donde ocurriere la violación o la amenaza que motivaren la presentación de la solicitud”

Por su parte, el Decreto 333 de 2021, que modificó las reglas de reparto establecidas en el los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, señaló:

"ARTÍCULO 2.2.3.1.2.1. Reparto de la acción de tutela. Para los efectos previstos en el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, conocerán de la acción de tutela, a prevención, los jueces con jurisdicción donde ocurriere la violación o la amenaza que motivare la presentación de la solicitud o donde se produjeran sus efectos, conforme a las siguientes reglas: 1. Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales. (...)

En ese sentido, el citado despacho judicial refirió que “si bien el accionante anota como entidad accionada a la Registraduría del Estado Civil del nivel Nacional; de los hechos de la demanda, sus pretensiones, como anexos, se desprende como único presunto vulnerador de derechos fundamentales (sin que se avizore necesidad de vincular a entidad del orden nacional), a la Delegación Departamental en Nariño del Registrador del Estado Civil, autoridad del orden departamental y responsable de los actos administrativos censurados por el actor.”

Finalmente concluyo que “Conforme los anteriores antecedentes, y la jurisprudencia traída a motivación, determinándose que la autoridad accionada corresponde específicamente a la Delegación Departamental del Registrador del Estado Civil, este juzgado carece de competencia y si la tiene el Juzgado Promiscuo Municipal de Francisco Pizarro, conforme con lo dispuesto en el multicitado artículo 2.2.3.1.2.1. del decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, por cuanto la autoridad que se alude en los hechos y pretensiones como vulneradora de derechos fundamentales es una entidad de orden departamental y la presunta violación o amenaza a la que se refiere la acción de amparo se concreta en el municipio de Francisco Pizarro, lugar en el cual se ubica el cargo pretendido por el actor, como es el sitio donde reside y se desenvuelve en forma cotidiana.”

Bajo estas premisas, y analizado el escrito tutelar primigenio, encuentra el despacho que es el competente para avocar conocimiento del presente tramite tutelar, en atención al factor territorial de competencia, teniendo presente que la entidad accionada es una entidad de orden departamental y municipal, aunado a ello, la presunta vulneración o amenaza de los derechos fundamentales del actor tienen asiento en el municipio de Francisco Pizarro (N), lugar donde además se encuentra ubicado el domicilio de la parte accionante y una de las entidades accionadas.

Ahora bien, una vez definido el factor competencia, procede la judicatura a analizar la presente acción constitucional incoada por el señor JAIME ENRIQUE CASTILLO



BANGUERA, quien acude ante esta autoridad judicial con la finalidad de que le sea amparado sus derechos fundamentales al TRABAJO, IGUALDAD, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, NO DISCRIMINACIÓN Y CONFIANZA LEGÍTIMA, presuntamente vulnerados por las entidades accionadas, al establecer criterios de selección discriminatorios que impiden el acceso de todos los ciudadanos a las ofertas de empleo convocadas por dicha entidad, desconociendo su experiencia y mérito para acceder a los cargos ofertados respecto a la sede del municipio de Francisco Pizarro (N), vulnerando además el debido proceso al no dar respuesta a los recursos de reposición y apelación interpuestos por el accionante.

Así las cosas, este estrado judicial encuentra que de conformidad a lo reglado por el artículo 86 de la Constitución Nacional y el contenido del artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, es necesario decretarse la admisibilidad de la presente acción de tutela como quiera que se cumple con los requisitos formales y sustanciales para el efecto.

Ahora bien, de la revisión del escrito tutelar y de sus pretensiones, se evidencia la posible afectación de los intereses de todas las personas que integran el registro de elegibles para el cargo de auxiliar administrativo código 512004 para sede Municipio de Francisco Pizarro (N), conformada mediante resolución 378 de junio 14 de 2023, acorde a convocatoria 282 mayo 26 de 2023, efectuada por la DELEGACIÓN DEPARTAMENTAL DE NARIÑO DE LA REGISTRADURÍA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, dada su vinculación con los hechos de la demanda y por el interés que puedan tener en las resultas del proceso, respectivamente, razones por las cuales se dispondrá su vinculación a la presente actuación, a fin de conformar en debida forma el contradictorio y evitar nulidades posteriores, sin necesidad de decretar la prueba testimonial solicitada por el accionante.

DE LA SOLICITUD DE MEDIDA CAUTELAR.

Dispone el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 lo siguiente:

“Artículo 7º. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante.

La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible.

El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso.

El juez podrá, de oficio o a petición de parte, por resolución debidamente fundada, hacer cesar en cualquier momento la autorización de ejecución o las otras medidas cautelares que hubiere dictado.”



Ahora bien, al respecto la Honorable Corte Constitucional ha fijado unos requisitos a tener en cuenta, al momento de considerar la aplicación de una medida provisional, en aras de evitar el uso inadecuado de tal medida, así:

“(i) Que la solicitud de protección constitucional contenida en la acción de tutela tenga vocación aparente de viabilidad por estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables, es decir, que exista la apariencia de un buen derecho (fumus boni iuris);

(ii) Que exista un riesgo probable de que la protección constitucional pretendida pueda verse afectada considerablemente por el tiempo transcurrido durante el trámite de revisión, esto es, que haya un peligro en la demora (periculum in mora); y

(iii) Que la medida provisional solicitada no genere un daño desproporcionado a quien afecta directamente.1.” (...)

Con fundamento en lo previamente expuesto, y descendiendo al asunto de marras, encuentra el despacho que el accionante solicita que mientras se decide de fondo la presente petición de amparo, se ordene a las accionadas suspender provisionalmente la recepción de documentos para posesión, nombramientos, posesiones, afiliación a seguridad social y capacitación del personal elegible con el fin de impedir que la continuación de las actividades genere un perjuicio irremediable o que se generen situaciones que puedan configurar acciones de desigualdad frente a los demás participantes o integrantes del listado, puesto que este proceso se llevara a cabo entre el 26 hasta el 30 del mes de junio del año en curso.

Al respecto, dando aplicación a los criterios fijados por la H. Corte, frente a la vocación de viabilidad de la protección constitucional deprecada por el accionante, no observa el despacho acreditados siquiera sumariamente -en esta oportunidad procesal, los fundamentos fácticos y jurídicos que respalden su pedimento, aunado a ello, cabe resaltar que este aspecto será parte del análisis jurídico que le corresponda realizar a esta judicatura al momento de tomar la decisión de fondo, dado que la medida provisional no es el escenario procesal para resolver el caso, pues en el transcurso del trámite tutelar, además de definir sobre la procedencia de dicha petición, se contará con todos los elementos de juicio necesarios para resolver lo que en derecho corresponda.

Así las cosas, no observa este juzgador que se esté frente a una situación urgente que amerite la adopción de la medida provisional deprecada por el accionante, pues no se vislumbran situaciones especiales de las señaladas por la jurisprudencia constitucional, que hacen viable su procedencia, y que haga suponer un daño desproporcionado e irreparable para que exista vocación aparente de viabilidad del amparo invocado o conjuración de un perjuicio irremediable, más aún, cuando dicha medida podría tener una incidencia contra derechos e intereses de terceros directamente relacionados con el presente trámite tutelar.

En consecuencia, se procederá a negar por improcedente la medida provisional solicitada, clarificando que tal decisión no constituye en sí misma un prejuzgamiento, pues de hallarse material probatorio suficiente del cual se desprenda la lesión a los derechos fundamentales invocados, en cualquier etapa dentro del trámite de la acción tutelar es viable la adopción de medidas pertinentes para su protección o, en su defecto, se haría en la sentencia que decida el fondo del presente asunto.



En virtud de lo brevemente expuesto, el JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO- NARIÑO,

RESUELVE:

PRIMERO. - AVOCAR CONOCIMIENTO de la acción de tutela remitida por el del JUZGADO SEGUNDO CIVIL DEL CIRCUITO DE TUMACO (N), mediante providencia de fecha 27 de junio de los cursantes, por las consideraciones previamente expuestas.

SEGUNDO. - ADMITIR la presente Acción de Tutela, interpuesta por el señor JAIME ENRIQUE CASTILLO BANGUERA, identificado con cedula de ciudadanía No. 12.831.381, expedida en Francisco Pizarro (N), en contra de LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO (N), por la presunta violación de los derechos fundamentales al TRABAJO, IGUALDAD, ACCESO A CARGOS PÚBLICOS, DEBIDO PROCESO, NO DISCRIMINACIÓN Y CONFIANZA LEGITIMA.

TERCERO. - CORRER TRASLADO de la presente Acción de Tutela y sus anexos a LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL, DE LA DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y LA REGISTRADURIA MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO (N), por el término improrrogable de cuarenta y ocho (48) horas siguientes al recibo de esta comunicación, para que presente sus descargos, ejerza su derecho de defensa y aporte las pruebas que considere pertinentes.

CUARTO. - VINCULAR a la presente actuación, a todas las personas que conforman el registro de elegibles para el cargo de AUXILIAR ADMINISTRATIVO CODIGO 512004 conformado mediante resolución 378 de junio 14 de 2023 dentro de la Convocatoria 282 de mayo 26 de 2023, para la sede del municipio de Francisco Pizarro (N).

QUINTO. – NEGAR la medida provisional solicitada conforme lo expuesto en el presente proveído.

SEXTO. - ENTÉRESE a las personas vinculadas de la forma más expedita, a las que se les remitirá copia de la demanda tutelar y sus anexos a efectos que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación den respuesta a la solicitud de amparo y aporten las pruebas y documentos que sustenten sus descargos. A efectos del enteramiento de esta vinculación y del traslado de la acción de tutela y sus anexos a todos los elegibles para el cargo de auxiliar administrativo código 512004, lista conformada mediante resolución 378 de junio 14 de 2023 para sede municipio de Francisco Pizarro (N), se ordena al DELEGACION DEPARTAMENTAL DE NARIÑO DE LA REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL Y REGISTRADURIA MUNICIPAL DE FRANCISCO PIZARRO (N), que de manera inmediata proceda a notificar la totalidad del expediente de esta acción de tutela por el mecanismo más eficaz y expedito. De igual manera, se ordena publicar en la página web de la REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL la totalidad del expediente de esta acción de tutela a fin de garantizar el derecho de defensa y



contradicción. Una vez ello, deberá arrimar al Despacho los comprobantes respectivos.

SEPTIMO. - ADVIÉRTASE a dichas entidades que deben presentar de manera oportuna el informe solicitado según lo previsto en el artículo 19 del Decreto 2591 de 1991, pues de no hacerlo se tendrán por ciertos los hechos consignados en la demanda, conforme a lo estipulado en el artículo 20 de la misma normatividad.

OCTAVO. – TÉNGASE como pruebas la documentación aportada con el escrito de Tutela.

NOVENO. - NOTIFÍQUESE el presente auto por el medio más expedito a las partes interesadas de conformidad con lo establecido en el artículo 16 del Decreto 2591 de 1991.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

MANUEL WILSON VILLAREAL AREVALO
JUEZ